

El Salvador y la violencia de las pandillas

La migración desde El Salvador está conformada por una historia de disturbios civiles, intervenciones externas y desigualdades sociales profundamente arraigadas. Hogar de aproximadamente 6,4 millones de personas, el país es el más pequeño por territorio en América Central, pero el más densamente poblado. Una economía estancada, desastres naturales y altos niveles de diversas formas de violencia - en parte como resultado de la participación de los Estados Unidos en la región y las políticas de inmigración de EE. UU. de las últimas tres décadas, así como el fracaso continuado del gobierno salvadoreño para abordar los problemas sociales sistémicos - han empujado a un número creciente de personas a dejar el país en las últimas dos décadas.

Durante el siglo pasado, los Salvadoreños se han movido por todo el mundo, aunque hoy en día viven en gran medida en los Estados Unidos. Los casi 1,4 millones de inmigrantes de El Salvador, que representan un quinto de su población, representan el segundo grupo más grande de América Latina en los Estados Unidos, después de los Mexicanos. Al compartir profundos lazos económicos, militares y políticos, los Estados Unidos y El Salvador se han entrelazado por un contexto de migración que conecta comunidades en ambos países.

El estado legal precario de muchos migrantes Salvadoreños los ha dejado particularmente susceptibles a los efectos de los cambios en la política de inmigración de los Estados Unidos y la región. Junto con los inmigrantes de Honduras y Guatemala, los Salvadoreños han estado altamente representados entre las familias y los menores no acompañados que llegaron a la frontera sudoeste en los últimos años, y se han enfrentado a un aumento de la aplicación allí y en México. Además, en 2018 la administración Trump anunció que no extendería el Estatus de Protección Temporal (EPT) para los Salvadoreños, arrojando a unos 195,000 beneficiarios al limbo ya que ahora se espera que abandonen el país en septiembre de 2019, o arriesgarse a la deportación.

Este artículo rastrea la historia de la inmigración y la emigración Salvadoreña, describe la población de inmigrantes Salvadoreños en los Estados Unidos - con un enfoque en su tratamiento según las políticas de inmigración de los EE. UU. - y examina cuestiones políticas emergentes y en curso que afectan a estos migrantes y sus familias.

Luchas por la tierra y el movimiento de personas

El estado actual de El Salvador como país de origen de migrantes y solicitantes de asilo se remonta a décadas de profundas desigualdades políticas y socioeconómicas, que han dificultado la vida de la mayoría de los Salvadoreños.

Después de que El Salvador se independizó de España en 1821, sus nuevos líderes buscaron desarrollar el país económicamente, viendo los mercados internacionales como la clave del éxito. La migración al país durante e inmediatamente después del período colonial estaba compuesta principalmente por Españoles y, en menor grado, por otros Europeos, con una afluencia menor de negros a través de las costas del Caribe de los países vecinos. En 1860, El Salvador se había convertido en un importante exportador de café. Pero la producción de café llegó con una importante redistribución de la tierra, beneficiando a las élites de la época. La dependencia de una exportación importante también haría que la economía del país fuera vulnerable incluso a pequeñas fluctuaciones en el mercado mundial del café.

Entre 1880 y 1890, el gobierno privatizó las tierras comunales - donde vivían muchos Salvadoreños indígenas - para hacer que la producción de café fuera más eficiente y lucrativa. Aunque las comunidades se organizaron contra la privatización de la tierra, el gobierno, favoreciendo a los inmigrantes Europeos adinerados y a las familias locales ladinas (o mestizas) que estaban desarrollando el país, procedió a convertir estas tierras en plantaciones de café. Unas pocas élites locales tenían el monopolio de las exportaciones de café y los campesinos desplazados, principalmente de origen indígena, se convirtieron en mano de obra.

A finales de la década de 1920, el café representaba más del 90 por ciento de los ingresos de exportación de El Salvador, y el aumento de los precios trajo prosperidad. Pero los precios se desplomaron durante la Gran Depresión, y la crisis financiera golpeó al país. Los salarios cayeron y los campesinos, que ya habían perdido sus tierras por la privatización, quedaron desempleados. Los pequeños propietarios no podían hacer pagos sobre los préstamos y perdieron sus parcelas, facilitando aún más la concentración de la tierra en manos de unos pocos.

Apenas unos meses después de la elección del Presidente Arturo Araujo en 1931, un golpe de Estado militar llevó al poder al General Maximiliano Hernández Martínez. Hacia 1932, los campesinos y los estudiantes se habían organizado para exigir libertad política, reformas económicas y redistribución de la tierra. En respuesta, el gobierno ordenó el asesinato de miles de Salvadoreños, principalmente campesinos indígenas. Este evento, conocido como La Matanza, contribuyó a la consolidación del poder en manos de la elite económica y estableció la autoridad militar en el país durante las próximas décadas.

Comienzos de la migración.

La alianza de la elite militar-económica era sólidamente anti reformista, opuesta incluso a pequeñas reformas económicas o políticas - una posición que se mantendría durante décadas. Los salarios eran bajos y las condiciones de trabajo duras, motivando a decenas de miles de Salvadoreños a emigrar.

Se estima que unos 25,000 Salvadoreños emigraron a Honduras en la década de 1930, principalmente para trabajar en plantaciones de banano. Esta cifra aumentó a medida que el acceso a la tierra y los salarios decentes continuaron disminuyendo en El Salvador; en la década de 1940 había cerca de 40,000 Salvadoreños viviendo en Honduras y en 1969 había alrededor de 350,000. Los Salvadoreños también se fueron a trabajar en el Canal de Panamá y en los astilleros estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en San Francisco. Además, los trabajadores agrícolas se trasladaron internamente al trabajo en las plantaciones de café. Estos movimientos contribuyeron a una reestructuración de las familias Salvadoreñas, ya que muchas mujeres se quedaron en sus hogares y cumplieron funciones dobles de sostén de la familia y cuidado mientras los hombres se mudaban a otras partes del país y al extranjero.

Para la década de 1960, las reformas económicas trajeron cambios significativos a la estructura social de El Salvador. La economía salvadoreña se expandió pero el crecimiento en las ganancias también generó desigualdad social que solidificó las divisiones de clase. Además, Alliance for Progress, un programa estadounidense creado en respuesta a la amenaza percibida del comunismo en América Latina, amplió los fondos para la educación, la atención médica y la vivienda, pero también presionó para que se centre en las "preocupaciones de seguridad" en la región. , brindando a El Salvador asistencia económica y militar de los Estados Unidos.

En medio de las crecientes tensiones con El Salvador - que culminaron en una guerra de cinco días - Honduras anunció en 1969 que comenzaría a expulsar a los agricultores nacidos en el extranjero de sus tierras. Hasta 300,000 campesinos Salvadoreños fueron expulsados de Honduras como resultado. Esta migración de retorno amplió las presiones económicas y sociales en El Salvador. En 1970, los retornados habían engrosado las filas de los campesinos sin tierra, que enfrentaban tasas de desempleo de hasta el 45 por ciento así como también el estancamiento de los salarios. En 1971, aproximadamente el 41 por ciento de los campesinos Salvadoreños no tenían tierras. El período de prosperidad económica llegó a un abrupto final cuando el precio del café cayó nuevamente en los años setenta.

A pesar de estas convulsiones, la riqueza continuó creciendo y se concentró cada vez más en las manos de unos pocos, lo que llevó a una desigualdad social aún más profunda. Las condiciones estaban maduras para el surgimiento de asociaciones cívicas y organizaciones políticas tanto de la izquierda como de la derecha.

La guerra civil alimenta el desplazamiento masivo.

La generación del malestar social estalló en un conflicto abierto a mediados de la década de 1970, que culminó en una sangrienta guerra civil que duró 12 años. Los Estados Unidos desempeñó un papel fundamental al proporcionar niveles sin precedentes de ayuda militar, capacitación y asesores a los gobiernos en el poder. La guerra desplazó a más de 1 millón de Salvadoreños - aproximadamente una quinta parte de la población en ese momento - tanto dentro del país como a lo largo de América Central y a México, Estados Unidos, Canadá y Australia. Los países vecinos, como Costa Rica, Honduras y Panamá, establecieron campamentos de refugiados para alojar a los salvadoreños que huían de la guerra.

Unas 75,000 personas fueron asesinadas durante la guerra, además de los miles que fueron torturados y desaparecidos; más del 85 por ciento de estas atrocidades fueron cometidas por el gobierno, según un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU. Tales niveles extremos de violencia estatal y terror sostenido alteraron para siempre el tejido social del país, incluso después de que se firmaran los Acuerdos de Paz para terminar la guerra en 1992. El Salvador quedó inundado de armas y con niveles de trauma psicosocial que ascendieron a un " militarización de la mente ", en palabras del erudito y sacerdote Jesuita asesinado, Ignacio Martín-Baró. Mientras tanto, las estructuras socioeconómicas no se tocaron, y la desigualdad continuó profundizándose.

En los años posteriores a la guerra, El Salvador implementó las políticas neoliberales que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - y luego el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial - presionaron a los países en desarrollo a cambio de préstamos. Estas políticas contribuyeron a una disminución drástica del gasto social, especialmente en educación, y condujeron a la privatización de instituciones que incluyen bancos nacionales y servicios públicos. Aquí también, los Estados Unidos jugó un papel clave al respaldar la privatización.

En enero de 2001, el país adoptó el dólar estadounidense como su moneda oficial, lo que contribuyó a la tasa de crecimiento más baja observada en El Salvador durante los últimos 60 años. También ayudó a que la vida cotidiana de la mayoría de los Salvadoreños fuera más costosa y las necesidades básicas fueran casi imposibles de cumplir. Tal agitación en la economía dejó a los jóvenes - que habían crecido en una sociedad militarizada rodeada de violencia cotidiana - con oportunidades limitadas. Los jóvenes

Salvadoreños se involucraron cada vez más con las pandillas, ya que estos grupos les proporcionaron las oportunidades financieras y los recursos sociales que el gobierno siguió negándoles sistemáticamente.

La pobreza y la violencia persisten.

Sin cambiar la estructura económica desigual del país, los Acuerdos de Paz no mejoraron la vida de la mayoría de los Salvadoreños. El cuarto de siglo desde entonces ha visto un empeoramiento de las condiciones de vida, una desigualdad cada vez mayor y una economía sustentada artificialmente por las remesas que los Salvadoreños en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, envían regularmente a sus familias. Estas remesas - que sumaron U.S.\$ 5 mil millones en 2017, aproximadamente una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según datos del Banco Mundial, ayudan a mantener a flote la economía salvadoreña. En algunos años, las remesas constituyen dos o tres veces el gasto social público del país. A un nivel menos agregado, las remesas aseguran directamente la supervivencia de las familias de los migrantes. Pero la mayoría de los Salvadoreños, especialmente los que no tienen familiares que envían remesas desde el extranjero, siguen siendo pobres.

La guerra civil dejó atrás una sociedad militarizada con la mayoría de su población incapaz de ganar lo suficiente para sobrevivir, creando un terreno de reclutamiento fértil para los cárteles de la droga y varios grupos del crimen organizado. Además, las deportaciones de Salvadoreños desde Estados Unidos, que comenzaron en la década de 1980 y se aceleraron en la década de 1990, exacerbaron significativamente las tendencias violentas en el país. Los deportados incluyeron a jóvenes Salvadoreños que formaron pandillas en los Estados Unidos - su forma de navegar la vida en vecindarios inhóspitos - contribuyendo a una tormenta perfecta que permitió que estas actividades proliferaran en El Salvador.

Hoy en día, los niveles de violencia son incluso más altos que durante la guerra y han envuelto a comunidades enteras. La abrumadora mayoría de las víctimas son Salvadoreños pobres, de clase trabajadora, que deben llevar su vida cotidiana en algunas de las zonas más peligrosas y que no pueden pagar las empresas privadas de seguridad que protegen a los adinerados.

En particular, el contexto de violencia visto hoy, explicado fácilmente como "violencia de pandillas" o como resultado de la deportación de pandilleros de las cárceles estadounidenses, tiene raíces más profundas en las crecientes tendencias de desigualdad que comenzaron hace décadas. Estas tendencias incluyen la acumulación continua de riqueza por unos pocos, la implementación de políticas neoliberales que recortaron el gasto público y una oposición intransigente a la reforma social que podría beneficiar a la mayoría de los Salvadoreños - que ahora recurren a la migración como la única opción para sobrevivir. Este contexto ha contribuido a mantener un gran flujo de Salvadoreños que abandonan el país, lo que a su vez ha tenido consecuencias directas para la economía: la mano de obra se ha reducido y las remesas se han convertido en una de las mayores fuentes de divisas.

El tratamiento a los Salvadoreños bajo la política de inmigración de los Estados Unidos

Aproximadamente medio millón de Salvadoreños huyeron a los Estados Unidos durante la década de 1980. Sin embargo, sólo el 2 por ciento de las solicitudes de asilo presentadas por Salvadoreños durante la guerra fueron aprobadas. Debido a la gran participación de los Estados Unidos en el conflicto salvadoreño - proporcionando un amplio apoyo militar y ayuda al gobierno salvadoreño - el gobierno de los EE. UU. se mostró reacio a extender la protección a estos solicitantes de asilo porque hacerlo habría contradicho su propia política exterior.

Sin el estatus de refugiado, la mayoría de los Salvadoreños que huyeron de la guerra y llegaron a los Estados Unidos fueron tratados como inmigrantes no autorizados. En 1985, las organizaciones de inmigrantes de América Central y las Iglesias entablaron una demanda contra el gobierno de los EE. UU. para protestar contra las políticas de asilo hacia los Salvadoreños (y los Guatemaltecos, que huían de su propia guerra civil sangrienta). Esta demanda, más tarde conocida como la conciliación de las Iglesias Bautistas Americanas v. Thornburgh (ABC), otorgó a estos inmigrantes la oportunidad de volver a solicitar asilo y recibir una audiencia imparcial. La ABC también estipuló que se les otorgarían permisos de trabajo mientras sus casos estaban siendo adjudicados. Bajo la presión de las organizaciones comunitarias y religiosas y las apelaciones de los líderes Salvadoreños, los Estados Unidos incluyeron una disposición en la Ley de Inmigración de 1990 que reconocía la difícil situación de las personas que buscaban protección sin contradecir la política de asilo. Conocido como Estatus de Protección Temporal (EPT), permite a ciudadanos extranjeros de ciertos países vivir y trabajar en los Estados Unidos si no pueden regresar de manera segura debido a un conflicto o desastre natural; los Salvadoreños fueron los primeros receptores.

Desde su inicio, el EPT fue diseñado para ser temporal, con una duración no mayor de 18 meses (aunque se puede renovar la designación de un país). A diferencia del asilo o el estatuto de refugiado, el EPT no proporciona un camino hacia la residencia permanente u otras protecciones que los asilados o refugiados formalmente reconocidos puedan recibir.

Para 1992, aproximadamente 187.000 Salvadoreños se habían registrado para el EPT. Ese año, el EPT para El Salvador terminó y fue reemplazado con la Salida Forzada Diferida, que mantuvo la residencia temporal y la autorización de trabajo para Salvadoreños

hasta septiembre de 1995. En 1997, el artículo 203 de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Asistencia Centroamericana estipuló la "cancelación de deportación" y la oportunidad de solicitar la residencia permanente legal a algunos Salvadoreños (junto con los Guatemaltecos y personas de países ex Soviéticos) que ingresaron a los Estados Unidos antes de septiembre de 1990 y que también solicitaron asilo bajo el caso ABC. Casi 200.000 Salvadoreños y otros han recibido tarjetas de residencia bajo esta disposición. En 2001, después de que dos terremotos letales golpearon a El Salvador con sólo dos semanas de diferencia, los Estados Unidos designó nuevamente a El Salvador para EPT, extendiendo a los Salvadoreños que ya estaban en el país la oportunidad de solicitar esta protección. La designación fue renovada consecutivamente nueve veces, hasta que la administración Trump anunció que la EPT terminará para El Salvador en septiembre de 2019. Aproximadamente 195.000 Salvadoreños tenían EPT a partir de 2016, lo que representa la mayor participación de todos los titulares de EPT, de acuerdo con un cálculo del gobierno de EE. UU. Los poseedores de EPT Salvadoreños han vivido en los Estados Unidos de manera continua desde al menos 2001 - la mayoría, al menos la mitad de sus vidas - participando activamente en la economía, estableciendo familias y construyendo comunidades.

Más allá del EPT, los Salvadoreños también participan en el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) a altas tasas. El Instituto de Política Migratoria (MPI) estima que 465.000 Salvadoreños viven en Estados Unidos sin autorización, lo que los convierte en el tercer grupo no autorizado más grande. A partir de enero de 2018, casi 26.000 jóvenes Salvadoreños no autorizados participaban en el programa DACA, o el 62 por ciento de los elegibles. Esta es la segunda tasa de participación más alta después de los Mexicanos, de acuerdo con las estimaciones del MPI.

Dada la naturaleza precaria de los programas de protección temporal, el pequeño número de avenidas para obtener estatus permanente y la resistencia del gobierno de Estados Unidos a otorgar asilo a los Salvadoreños (pasados y presentes), el estatus migratorio ha sido una característica central de la experiencia inmigrante salvadoreña. Muchos Salvadoreños se han visto obligados a migrar sin autorización o buscar asilo.

La migración contemporánea de El Salvador.

La migración salvadoreña a los Estados Unidos ha seguido creciendo en las últimas dos décadas, empujada por la violencia, la desigualdad y la pobreza en el hogar y atraída por la perspectiva de una vida mejor en los Estados Unidos o la reunificación con parientes allí. La población de inmigrantes salvadoreños casi se triplicó entre 1990 y 2016 (ver Figura 1).

Figura 1. Población de Salvadoreños en los Estados Unidos, 1960-2016

Fuente : Tabulación del Instituto de Política Migratoria (MPI) de datos de la Oficina del Censo de EE. UU., Encuestas de la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2010 y 2016, y Censo Decenal 2000; los datos de 1960 a 1990 son de Campbell J. Gibson y Emily Lennon, "Estadísticas históricas del censo sobre la población nacida en el extranjero de los Estados Unidos: 1850 a 1990" (Documento de trabajo n. ° 29, Oficina del Censo de los Estados Unidos, Washington, DC, 1999).

Un número menor de Salvadoreños vive en otros destinos, principalmente en América del Norte y Central, Australia y Europa. Los principales países anfitriones además de los Estados Unidos son Canadá (51.000 Salvadoreños), Guatemala (20.000), Costa Rica (14.000), Italia (13.000) y Australia (12.000), según las estimaciones de la ONU a mediados de 2017.

Para la mayoría de los Salvadoreños que buscan un alivio de la violencia, la migración en sí implica otra capa de peligro. Este viaje implica viajar largas distancias por tierra y cruzar múltiples fronteras internacionales. La mayoría de los Salvadoreños carecen de un camino para obtener una visa de los Estados Unidos; en general, no pueden obtener el patrocinio del empleador, y los miembros de su familia en los Estados Unidos generalmente no tienen la capacidad económica o legal de patrocinarlos.

Cada vez más, cruzar México por tierra se ha convertido en una de las empresas de migración más traicioneras del mundo. Los centroamericanos que huyeron de las guerras civiles de la década de 1980 se refirieron a los peligros del pasaje de México como "juicio por fuego". En 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informó que 1.600 migrantes (en su mayoría centroamericanos) fueron secuestrados a diario en promedio, y aproximadamente el 10 por ciento de las 140.000 personas que cruzaron México anualmente perecieron en el viaje.

La ruta es particularmente peligrosa para las mujeres migrantes: los profesionales de la salud estiman que seis de cada diez mujeres y niñas centroamericanas son violadas durante su viaje a través de México. Estas condiciones han empeorado drásticamente a medida que los migrantes más vulnerables pasan por México, y los cárteles de la droga y los contrabandistas trabajan juntos para traficar con humanos y drogas.

La Asamblea General de la ONU publicó un informe de su Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos en 2017 sobre ejecuciones arbitrarias de refugiados y migrantes que viajan a través de México, señalando colaboraciones entre actores estatales y no estatales como responsables de homicidios, extorsiones, secuestros y un régimen generalizado de impunidad.

Menores no acompañados y migración familiar

En 2014, las autoridades y los medios de comunicación de los EE. UU. notaron un aumento de jóvenes no acompañados - principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también algunos de México - y familias que llegan a Estados Unidos para escapar de la violencia y la pobreza en sus países.

Si bien la migración juvenil Salvadoreña no es nueva, en los últimos años han salido más jóvenes del país, debido a las limitadas oportunidades educativas, la falta de oportunidades económicas, la vulnerabilidad de vivir lejos de los padres en un contexto de violencia endémica de pandillas y la gran cantidad de padres migrando. Algunos migrantes adolescentes son padres ellos mismos, dirigiéndose al norte para mantener a sus propios hijos. En el año fiscal 2014 (AF) 2014, aproximadamente 68.500 inmigrantes menores no acompañados fueron detenidos en la frontera suroeste de los Estados Unidos, un aumento del 77 por ciento con respecto al año anterior. De estos, aproximadamente 16.400 fueron Salvadoreños, un aumento casi tres veces superior al del año fiscal 2013 (ver Tabla 1). Además, alrededor de 68.400 familias de todas las nacionalidades fueron detenidas en el año fiscal 2014, más de cuatro veces el número del año anterior.

Tabla 1. Capturas de niños y unidades familiares no acompañados de El Salvador en la frontera EE. UU.-México, año fiscal 2012-2018

Nota : Los datos de unidad familiar no están disponibles para El Salvador antes del año fiscal 2014. Los números para el año fiscal 2018 son parciales y representan a los inmigrantes detenidos entre octubre de 2017 y junio de 2018.

Fuente : US Customs and Border Protection (CBP), "Southwest Family Family Unit and UAC Aplicaciones "(hojas informativas, CBP, varios años), consultado el 6 de agosto de 2018

En respuesta a este aumento, el gobierno de los EE. UU. aumentó los esfuerzos de cumplimiento fronterizo y abrió una serie de centros de detención privados para familias (principalmente mujeres y sus hijos) mientras sus casos de asilo estaban pendientes. Debido a un acuerdo judicial que requiere el cuidado de niños en el "entorno menos restrictivo" posible, el gobierno de los EE. UU. comenzó a liberar jóvenes no acompañados a familiares en los Estados Unidos.

Además, bajo la presión del gobierno de los EE. UU., México ha promulgado un conjunto de iniciativas de seguridad en su frontera con Guatemala y en todo su territorio. En 2014 lanzó el Programa Frontera Sur, que hizo que cruzar esta frontera fuera más difícil y amenazante para la vida. Las nuevas políticas mexicanas, que reflejan fielmente las políticas fronterizas de los Estados Unidos, han empujado a los Salvadoreños y otros migrantes centroamericanos a terrenos extenuantes y peligrosos.

Desarrollo de políticas migratorias en El Salvador

Desde la década del 2000, el gobierno salvadoreño ha creado una serie de programas para ayudar a los migrantes Salvadoreños en el exterior y promover sus derechos y protecciones. El gobierno ha llegado a reconocer las contribuciones significativas de los migrantes Salvadoreños, ya que sus remesas, inversiones y habilidades proporcionan una gama de recursos necesarios para el país. Por lo tanto, hasta 2018 cabildeó con éxito al gobierno de los EE. UU. para que re designara a El Salvador para EPT, y realizó una campaña activa en las comunidades de inmigrantes Salvadoreños para recordarles a los beneficiarios que se volvieran a inscribir en el programa. En 2013, El Salvador aprobó una ley que permite a los emigrantes votar en las elecciones nacionales del país desde el extranjero.

El gobierno también ha dirigido su atención a involucrar a la diáspora con fines de desarrollo. En 1999, el Fondo de Inversión Social (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local o FISDL) comenzó a enfocarse en los Salvadoreños en el exterior, alentando a las organizaciones de la diáspora, organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones locales a contribuir a proyectos de desarrollo en El Salvador. El programa ha ayudado a construir escuelas, instalaciones recreativas y centros de salud.

Más recientemente, ante el aumento de las deportaciones, el gobierno y las ONG han creado programas para reintegrar a los retornados y garantizar que encuentren trabajos que se ajusten a su experiencia laboral. Los crecientes centros de llamadas en el país, en particular los que requieren conocimientos de inglés, han atraído a muchos deportados. Sin embargo, el hecho es que la economía de El Salvador no puede absorber a todos los migrantes que regresan, por lo tanto, muchos planean un regreso inminente a los Estados Unidos - particularmente aquellos que dejaron a sus hijos, cónyuges y padres.

Los Salvadoreños en los Estados Unidos hoy

En 2016, aproximadamente 1.387.000 Salvadoreños vivían en los Estados Unidos, lo que los convertía en el mayor grupo de inmigrantes centroamericanos, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. La diáspora Salvadoreña cuenta con aproximadamente 2.195.000 personas, incluidas las nacidas en los Estados Unidos de padres Salvadoreños. Entre los Salvadoreños que tienen EPT, la mayoría ha vivido en el país durante dos décadas o más, y todos han estado presentes desde al menos 2001 como lo exige el programa. En este momento, se han establecido en comunidades en todo el país. Un poco más de la mitad son hombres, y alrededor del 41 por ciento de todos los Salvadoreños con EPT están casados. Alrededor del 86 por

ciento tiene hijos y cerca del 60 por ciento tiene hijos en los Estados Unidos, muchos de los cuales nacidos en los EE. UU. La gran mayoría de los hombres y mujeres Salvadoreños con EPT están en la fuerza de trabajo - 94 por ciento y 82 por ciento, respectivamente. Las experiencias laborales de los Salvadoreños de EPT varían, pero la mayoría trabaja en empleos de tiempo completo de 40 horas por semana o más. Los hombres comúnmente trabajan en trabajos de construcción, transporte y limpieza de oficinas. Entre las mujeres, las ocupaciones más comunes son la limpieza y el cuidado de niños.

Los Salvadoreños con EPT están activos en sus comunidades: casi el 30 por ciento participa en organizaciones vecinales, Iglesias, escuelas, asociaciones laborales o equipos deportivos. La mayoría de los titulares de EPT (78 por ciento) informan que pueden obtener un mejor empleo después de recibir el EPT, sintiéndose más seguros para sí mismos (67 por ciento) y para sus familias (aproximadamente el 38 por ciento).

Problemas en el horizonte

Sobre la base de las políticas de las administraciones anteriores, la administración Trump ha iniciado una serie de decisiones políticas que afectan directamente a la población Salvadoreña que ya se encuentra en los Estados Unidos, así como a sus familias y posibles migrantes en origen. Terminó el EPT para los Salvadoreños, una decisión que transformará a aquellos que no regresan a El Salvador de ser casi legales con permisos de trabajo en inmigrantes no autorizados.

Esta situación presagia serias consecuencias para los Salvadoreños y sus familias en los Estados Unidos y para los familiares en su país de origen, y probablemente frustrará las perspectivas de estabilidad futura de El Salvador. Aunque la mayoría de los casi 200.000 titulares de EPT probablemente optarán por permanecer en los Estados Unidos y pasar a las sombras, el final de la designación del EPT puede traducirse en el retorno voluntario o la deportación de algunos a un país sumido en la violencia y la volatilidad económica que no está preparado para recibirlos, mientras reduce drásticamente las remesas que han ayudado a mantener el país a flote desde el final de la guerra civil. También podría implicar la desintegración de las familias, ya que los Salvadoreños que regresan deciden si tomar la difícil decisión de dejar atrás a sus hijos ciudadanos estadounidenses.

Además, el Departamento de Justicia bajo la dirección del Fiscal General Jeff Sessions determinó que la violencia doméstica y de pandillas ya no constituye un motivo para el asilo, lo que dificulta que muchos Salvadoreños obtengan protección en los Estados Unidos. Y la administración lanzó una política de "tolerancia cero" en la frontera, enjuiciando en una Corte Federal a quienes cruzan sin autorización. Esta política resultó en la separación de más de 2,.

Debido a estas decisiones, las protecciones disponibles para algunos Salvadoreños bajo administraciones anteriores, por ejemplo en la forma de EPT o concesiones de asilo, casi todas han desaparecido.

En 2017, el gobierno salvadoreño lanzó la Política Nacional para la Protección y el Desarrollo de los Migrantes Salvadoreños y sus Familias (Política Nacional para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y Su Familia). Esta política tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los Salvadoreños en cada etapa de su viaje de migración - desde la pre partida, a la migración, el destino y el retorno. Queda por ver cómo se implementará este marco y qué puede significar para los Salvadoreños en ruta, ya sea que estén en el extranjero o en su camino de regreso.

Los factores que han impulsado a muchos Salvadoreños a migrar en las últimas tres décadas persisten y pueden incluso haberse intensificado, y las fuerzas que los empujan a los Estados Unidos siguen siendo fuertes. Por lo tanto, es probable que, a falta de cambios importantes en el país, los Salvadoreños continúen migrando, a pesar de los peligros que amenazan la vida en el viaje y de los muchos obstáculos que les esperan al ingresar a los Estados Unidos.

Autor: Cecilia Menjívar y Andrea Gómez Cervantes

* Artículo reproducido con el debido permiso de Migration Policy Institute. Migration Policy Institute no se hace responsable por la traducción. La traducción ha sido realizada por Francisco Luciani para Teología Hoy.